



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
M.P. Ramiro Aponte Pino

Neiva, veintitrés de abril de dos mil veinte.

Medio de control: CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
Acto: ORDEN DE SUMINISTRO 003 DEL 25 DE MARZO DE 2020 y CONTRATO DE SUMINISTRO 680 DEL 28 DE MARZO DE 2020
Autoridad: MUNICIPIO DE NEIVA (H)
Radicación: 41001-23-33-000-2020-00310-00

I.-EL ASUNTO.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y 185 del CPACA, se analiza si la *orden de suministro 003 del 22 de marzo de 2020* y el *Contrato de Suministro 680 del 28 del mismo mes y año*, suscrito entre el alcalde de Neiva (H) y Distribuciones Vargas Ramírez SAS, autorizando "...brindar un componente nutricional (MERCADO) que cumpla con las necesidades básicas nutricionales enmarcadas en el "PLAN OPERATIVO DE INTERVENCIÓN POR SERVICIO BÁSICO RESPUESTA A LA EMERGENCIA SANITARIA Y CALAMIDAD PÚBLICA POR LA PROPAGACIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"; es pasible del control inmediato de legalidad.

II.- ANTECEDENTES.

1.-Contando con el aval de la Oficina de Gestión del Riesgo, el 22 de marzo hogaño, el Alcalde de Neiva, emitió la *orden de suministro 003* por un valor de \$997.385.050 (IVA incluido), autorizando a Distribuciones Vargas Ramírez SAS suministrar 5.000 paquetes nutricionales para la población vulnerable de los estratos 1 y 2 del Sisben.

2.- El 28 de marzo siguiente, el burgomaestre y el representante legal de Distribuciones Vargas Ramírez SAS (Diógenes Vargas), suscribieron el *contrato de suministro 680*, comprometiéndose a "BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LOS ESTRATOS UNO (1) Y DOS (2) DEL SISBEN DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD MANIFESTA, COMPONENTE NUTRICIONAL CINCO MIL (5.000) MERCADOS".

En detalle se determinaron las cantidades, los valores y las especificaciones de cada ración alimenticia; el deber de garantizar que los productos son de óptima calidad y que cuenten con el registro sanitario Invima. Además,

entregarlos en las fechas y en los sitios indicados por el supervisor del contrato, atendiendo los protocolos de higiene, seguridad y salubridad.

3.- El 16 de abril de la presente anualidad¹, se asignó la sustanciación del asunto al suscrito magistrado.

No obstante la extemporaneidad de la remisión; la legalidad de los referidos actos se debe abordar de manera oficiosa; como lo establece la preceptiva anteriormente mencionada. Desde luego, siempre que sea posible del control inmediato.

III.- CONSIDERACIONES.

1.-El marco normativo y jurisprudencial que regula el *control inmediato de legalidad*.

a.- El artículo 20 de la Ley 137 de 1994², preceptúa que “...las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales.” (subrayado fuera de texto).

b.- Ese precepto fue reproducido por el artículo 136 del CPACA, y el artículo 151-14, *ibídem*, dispone que los Tribunales Administrativos conocerán en única de instancia del “...control inmediato de legalidad de los actos de carácter general que sean proferidos en ejercicio de la función administrativa durante los estados de excepción y como desarrollo de los decretos legislativos que fueren dictados por autoridades territoriales departamentales y municipales, cuya competencia corresponderá al tribunal del lugar donde se expidan” (el subrayado es nuestro).

c.- En opinión del H. Consejo de Estado, el control inmediato de legalidad “...es el medio jurídico previsto en la Constitución Política para examinar los actos administrativos de carácter general que se expiden al amparo de los estados de excepción, esto es, actos administrativos que desarrollan o reglamentan un decreto legislativo.”

El examen de legalidad se realiza mediante la confrontación del acto administrativo con las normas constitucionales que permiten la declaratoria de los estados de excepción (artículos 212 a 215 de la Constitución Política), la ley estatutaria de los estados de

¹ Tal como consta en la correspondiente acta de reparto de la misma fecha.

² *Por la cual se reglamentan los estados de excepción en Colombia.*

excepción (Ley 137 de 1994) y los decretos expedidos por el Gobierno Nacional con ocasión de la declaratoria del estado de excepción¹” (subraya la Sala).

De igual manera, dicha Colegiatura estableció los presupuestos que se deben satisfacer para que las medidas de las entidades territoriales sean susceptibles de *control inmediato de legalidad*:

“a) que sean de carácter general; b) que correspondan al ejercicio de la función administrativa y c) que se dicten en desarrollo de los decretos legislativos expedidos durante los Estados de Excepción²”.

2.- El caso concreto.

a.- La *orden de suministro 003* y el *contrato de suministro 680 de 2020*, constituyen un negocio jurídico³ que involucra la consensualidad de los extremos contractuales (la entidad territorial y un particular); de suerte que no es un acto administrativo ni una manifestación formal de la función administrativa (circulares, memorandos o directivas)⁴. Así las cosas, materialmente no pueden ser objeto del control inmediato de legalidad. Aunado al hecho de que no es desarrollo directo de los Decretos Legislativos expedidos en el estado de excepción. En consecuencia, no se asumirá el control sobre los mismos.

Ello, sin perjuicio que quienes tuvieran algún interés en su legalidad, puedan instaurar los medios de control ordinarios.

Con base en lo brevemente expuesto, el Tribunal Administrativo del Huila,

RESUELVE:

PRIMERO. - No asumir el control inmediato de legalidad de la *orden de suministro 003*, ni del *contrato de suministro 680* celebrado el 28 de marzo de esta anualidad entre el municipio de Neiva (H) y Distribuciones Vargas Ramírez SAS.

¹ Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, 5 de marzo de 2012. Radicación 11001-03-15-000-2010-00369-00 (CA).

² Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Reinaldo Chávarro Buriticá. Bogotá, D.C., Veintiocho (28) de Enero de Dos Mil Tres (2003). Radicación Número: 11001-03-15-000-2002-1280-01(CA-006). Posición reiterada, en providencia del 20 de octubre de 2009, proferida dentro del expediente radicado 2009-00549.

³ Artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

⁴ H. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Providencia el 15 de abril de 2020. C.P. Dr. William Hernández Gómez. Control inmediato de legalidad. Radicación: 11001-03-15-000-2020-01006-00.

Control Inmediato de Legalidad

Orden de suministro 003 y contrato de suministro 680 de 2020 – Municipio de Neiva (H)

41 001 23 33 000- 2020-00310-00

SEGUNDO.- Por el medio más expedito (electrónicamente), notificar esta decisión al Ministerio Público y a la entidad territorial remitente; además, publicarla en la página web de la Corporación.

TERCERO.- Surtido lo anterior, archivar la actuación.

NOTIFÍQUESE.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro Aponte Pino', with a long horizontal flourish extending to the right.

RAMIRO APONTE PINO
Magistrado